

Nuevamente nos dirigimos a V.I. en relación con el expediente de queja que se tramita en esta Institución con la referencia más arriba indicada (EQ-1305/2010), referente a retraso en la tramitación de un procedimiento de reconocimiento de los derechos dimanados de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Una vez llevada a cabo la correspondiente investigación, constan los siguientes

ANTECEDENTES

I. En su escrito de queja el reclamante, D. (...), exponía que tenía reconocido el 89% de minusvalía desde el año 2006. En atención al grado de minusvalía reconocido solicitó, con fecha 28 de abril de 2009, reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. El reclamante finalizaba su queja expresando que en la fecha de presentación de la misma, no había recibido comunicación alguna, desconociendo por tanto el estado de tramitación de su solicitud.

II. El Diputado del Común, considerando que la presente reclamación reunía los requisitos formales establecidos en la Ley Territorial 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común, acordó su admisión a trámite y solicitar a la entonces Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración que nos informase acerca del estado de tramitación la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema presentado por el Sr. (...) el 28 de abril de 2009 .

III. En respuesta a nuestra solicitud, con fecha 11 de julio recibimos Informe emitido por esa Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración.

El citado informe señala lo siguiente:

"*La solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia fue presentada el 28 de abril de 2009.*

El 24 de enero de 2010 se resuelve reconocer a la solicitante la situación de Gran Dependencia en Grado III, Nivel 1, si bien la notificación de la resolución fue devuelta por el Servicio Postal por AUSENTE EN REPARTO, no habiendo sido retirada en plazo en la oficina de correos.

No obstante, el 21 de marzo de 2011 se solicita informe social al Ayuntamiento de La Laguna que aún está pendiente de llegar. Una vez recibido éste, puesto que no ha sido rechazado, se procederá por parte del personal del Servicio de Dependencia a la realización del trámite de consulta con el solicitante y sus familiares a efectos de optar por la modalidad de intervención más adecuadas a sus necesidades.

Cumplimentados dichos trámites se procederá a elaborar la propuesta de Programa Individual de Atención a efectos de resolver el programa con la

modalidad de intervención propuesta.

· Actualmente también se encuentra pendiente de tramitar una resolución de rectificación de error, ya que se resolvió con un Grado III, Nivel 1, cuando se debió resolver con un Grado II, Nivel 2, atendiendo a la puntuación que le otorga el Baremo.”

IV. El informe emitido por la Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración fue trasladado al reclamante, para que efectuara las alegaciones que estimase oportunas. En fechas recientes, la esposa del reclamante se ha personado en nuestras oficinas y nos ha comunicado que por parte “de los servicios sociales del Ayuntamiento de La Laguna, salió informe social remitido a la Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración con fecha 21 de julio de 2001”. Igualmente la reclamante nos ha comunicado que en la fecha en que se personó en nuestras oficinas (27 de septiembre de 2011), continuaba pendiente de aprobación el Programa Individual de Atención de su marido, Sr. (...).

A la vista de los hechos reseñados, esta Institución estima necesario realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.-

Como señala la exposición de Motivos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados, para atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre regula las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Entre los principios inspiradores de esta Ley, sin ánimo de exhaustividad, podemos citar el de la atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada, la valoración de las necesidades de las personas, la personalización de la atención, la calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia o la atención preferente a las personas en situación de gran dependencia.

El acceso al sistema, como es conocido, se produce mediante la valoración de la persona solicitante, que es calificada en un grado y nivel de dependencia determinado, de acuerdo con el baremo aprobado por Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, que deroga el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las

personas en situación de dependencia. Posteriormente, mediante la elaboración del Programa Individual de Atención, que toma en consideración a la persona en su entorno familiar y social, se concreta la prestación o servicio, o la combinación de ambos, que corresponde a cada persona dependiente.

Tanto la valoración de la dependencia como la asignación de recursos a través del Programa Individual de Atención corresponden a los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados.

Segunda.-

En nuestra comunidad autónoma, la norma de referencia en materia de autonomía personal y atención a la dependencia es el Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, modificado posteriormente por Decreto 163/2008, de 15 de julio.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 9.3 de este Decreto, la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia deberá dictarse y notificarse a la persona solicitante o a sus representantes legales, conforme a lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo máximo de tres meses, que se computará a partir de la fecha de entrada de la solicitud en los registros de la Dirección General competente en materia de servicios sociales, todo ello sin perjuicio de los supuestos legales de suspensión de dicho plazo o del supuesto justificado de ampliación del mismo, en atención a las circunstancias concurrentes en el caso.

Esta resolución de reconocimiento de la situación de dependencia tendrá validez en todo el territorio del Estado y su eficacia quedará demorada hasta la aprobación del correspondiente Programa Individual de Atención (art. 9.4).

Por su parte, el artículo 12 de este mismo Decreto señala que la aprobación y notificación a la persona beneficiaria o a sus representantes legales del Programa Individual de Atención deberá producirse en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de notificación de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, salvo en los supuestos previstos en los apartados 4 y 5 de ese mismo artículo (se trata de los supuestos de efectividad a posteriori del PIA por aplicación de lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y de traslado a Canarias de un beneficiario de la Ley 39/2006 procedente de otra Comunidad Autónoma).

Cabe recordar que una vez aprobado el Programa Individual de Atención, los servicios y o prestaciones reconocidas pueden tener efecto retroactivo, en dos circunstancias diferentes:

a) Para solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia formuladas con anterioridad al 1 de junio de 2010, los efectos del reconocimiento se retrotraen a partir del inicio de su año de implantación de acuerdo con el calendario del apartado 1 de la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, o al momento de la solicitud de reconocimiento por el interesado, si ésta es posterior a esa fecha.

b) Para solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia formuladas a partir del 1 de junio de 2010, el reconocimiento del derecho contenido en las resoluciones de las administraciones públicas competentes generará el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes a partir de la fecha de la resolución en la que se reconozca la concreta prestación o prestaciones que corresponden a la persona beneficiaria, si bien en aquellos casos en los que una vez transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la solicitud, no se hubiera notificado resolución expresa de reconocimiento de prestación, el derecho de acceso a la prestación económica que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado.

Tercera.-

Tanto en esta queja (EQ-1305/2010), como en otras que se tramitan en esta Institución, observamos que se han incumplido los plazos para resolver los procedimientos en materia de dependencia que establece la normativa autonómica.

En concreto, en el expediente al que se refiere esta queja han transcurrido más de 8 meses desde que se formuló la solicitud hasta que se aprobó la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia. Cabe recordar que el plazo previsto por la normativa canaria para dictar y notificar esta resolución es de 3 meses.

Además, en la fecha de la última comunicación que nos ha realizado la esposa del reclamante, aún no se había aprobado el Programa Individual de Atención, habiendo transcurrido más de 20 meses desde que se aprobó el reconocimiento de la situación de dependencia, y más de 28 meses desde que se presentó la solicitud inicial. Cabe destacar, además, la aparente existencia de un largo periodo de inactividad en la tramitación del expediente, entre el momento en que se produce la devolución de la notificación y el momento en que se solicita, por esa Viceconsejería, el Informe Social al Ayuntamiento de La Laguna. Es además necesario recordar, en este punto, que el artículo 58.2, párrafo segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señala :

"Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. "

Del informe recibido no parece desprenderse, sin embargo, que se intentara la notificación por segunda vez, como exige la Ley.

En definitiva, debido a la excesiva dilación en la resolución del procedimiento, se ha producido un supuesto de mala administración, que debe ser corregido con la mayor celeridad.

Entendemos, además, que esta mala administración puede generar responsabilidad de la Administración Pública, puesto que, como señala el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, *"Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos"*.

En este sentido, cabe recordar que el artículo 5 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, señala que cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial entienda que se han producido lesiones en los bienes y derechos de los particulares en los términos previstos en el artículo 2 de dicho Reglamento iniciará el procedimiento regulado en el Capítulo II del mismo.

En virtud de los antecedentes y de las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.1 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, HE RESUELTO remitir a V.I. la siguiente Resolución del Diputado del Común:

RECOMENDACIÓN

- La Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar que las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia, y los procedimientos de elaboración del Programa Individual de Atención se resuelven en los plazos que establece el Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, modificado posteriormente por Decreto 163/2008, de 15 de julio.

- Igualmente, esa Viceconsejería debe valorar la posible iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración, para indemnizar al interesado de la lesión sufrida en sus derechos, como consecuencia de la demora en la tramitación de sus expedientes.

De conformidad con lo previsto en el art. 37.3 de la citada Ley 7/2001, deberá comunicar a este Comisionado Parlamentario si acepta o rechaza la presente Resolución del Diputado del Común, en término no superior al de un mes. En el supuesto de que acepte la Resolución, deberá comunicar las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma. En el caso contrario, deberá remitir informe motivado del

rechazo de la Resolución del Diputado del Común.

Para su conocimiento, le comunico que esta Resolución será publicada en la página web institucional (www.diputadodelcomun.org), cuando se tenga constancia de su recepción por ese organismo.

Atentamente.

Manuel Alcaide Alonso
DIPUTADO DEL COMÚN